Protocolo Regional de actuación frente al Ciberacoso contra adolescentes en Junín



PROTOCOLO REGIONAL DE ACTUACIÓN FRENTE AL CIBERACOSO CONTRA ADOLESCENTES EN LA REGION JUNÍN
(Ordenanza regional: 425-2025)

FLORA TRISTÁN
CENTRO DE LA MUJER PERUANA

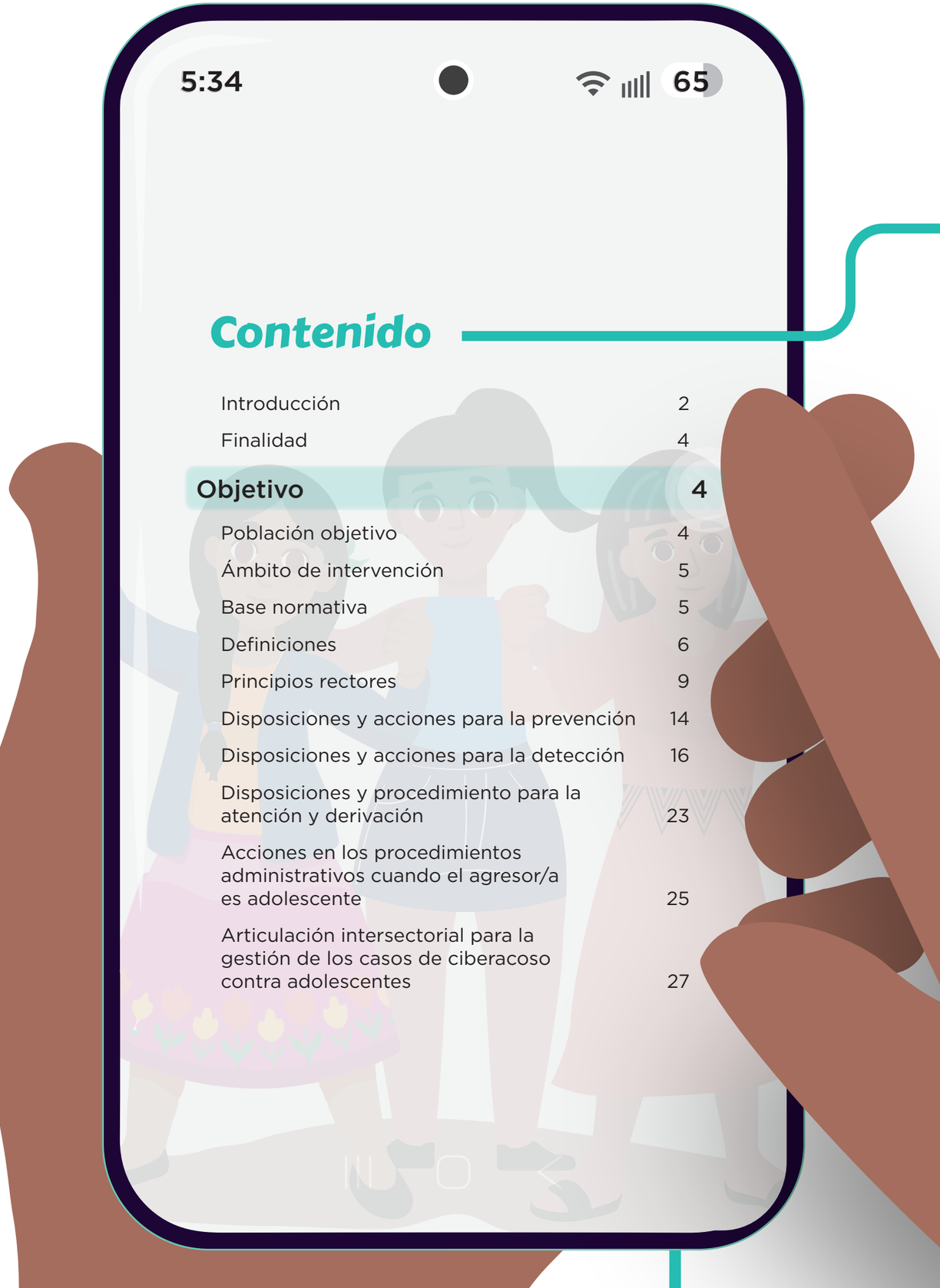
©Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
Parque Hernán Velarde Nº 42, Lima, Perú
Teléfono: (51 1) 433 1457
E-mail: postmast@flora.org.pe

Programa de Derechos Humanos
Coordinación:
Giovanna Herrera Quispe

Elaboración de contenidos:
Anthuane Salvador Vega

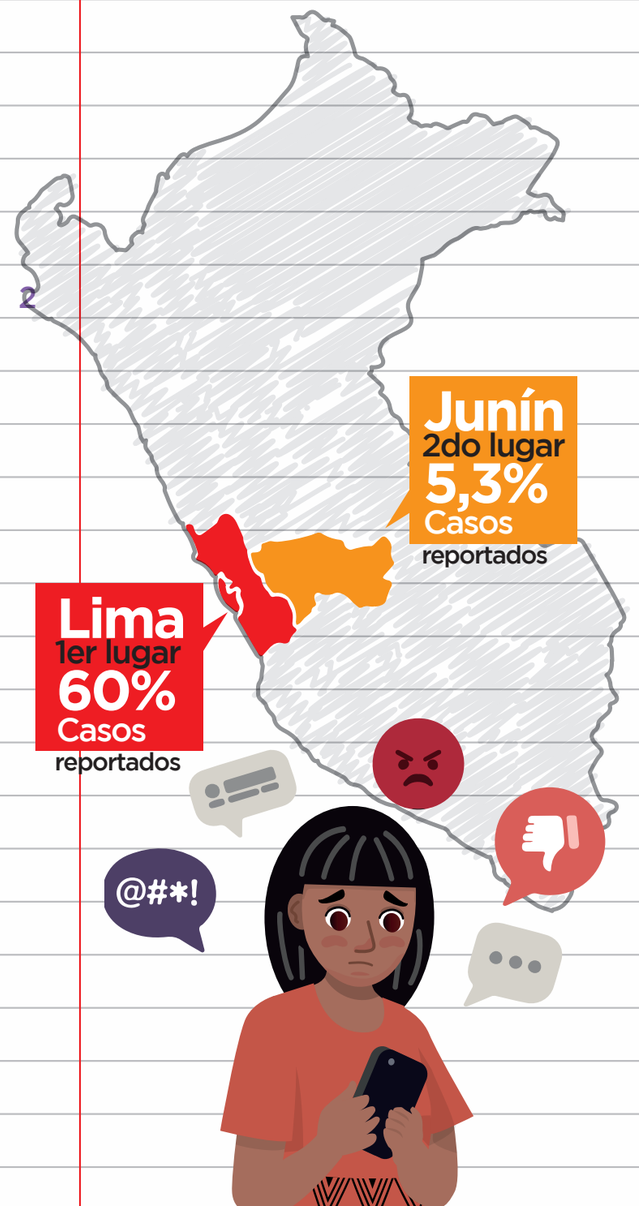
Revisión:
ÁREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE JUNÍN - DREJ
Estrategia para el Fortalecimiento para la Gestión de la convivencia escolar, la prevención y atención de la violencia en las instancias de gestión Educativa Descentraliza - Dirección de Gestión Pedagógica - Dirección Regional de Educación Junín (DREJ)

Diseño e impresión:
Ymagino Publicidad S.A.C.



Introducción

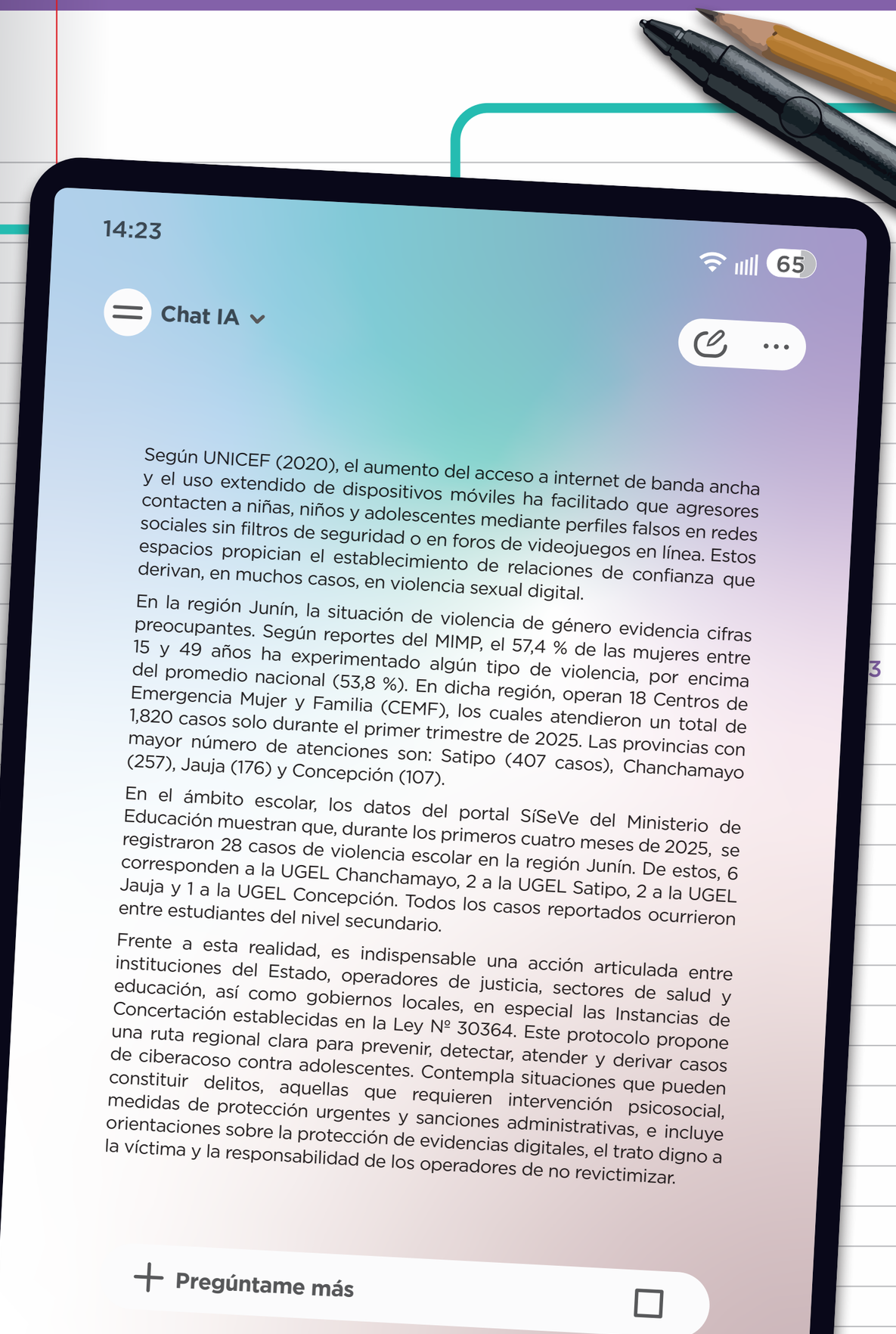
En el Perú, el acceso a internet ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2009, el 33,9 % de la población mayor de seis años tenía acceso a internet; para septiembre de 2020, esta cifra se había incrementado a 70,3 %. Este avance ha ampliado significativamente las oportunidades de comunicación, aprendizaje y ejercicio de derechos. Sin embargo, también ha incrementado la exposición de adolescentes a nuevas formas de violencia que se ejercen mediante plataformas digitales.



Una de las expresiones más preocupantes de esta violencia es el ciberacoso, que incluye actos de hostigamiento, amenazas, humillaciones, difusión de contenido íntimo sin consentimiento, suplantación de identidad, entre otros. A diferencia del acoso presencial, el ciberacoso no conoce límites físicos ni temporales, puede replicarse de forma masiva y dejar una huella digital permanente que afecta gravemente el bienestar emocional y social de las víctimas.

A nivel nacional, los datos del Registro de Alerta contra el Acoso Virtual a las Mujeres (MIMP, 2024) indican que las principales plataformas donde se reportan casos son WhatsApp, Facebook e Instagram. Las manifestaciones más frecuentes incluyen el hostigamiento, las ciberamenazas y los insultos electrónicos.

Cabe destacar que el grupo etario de 18 a 29 años representa el 59% de los casos reportados, siendo mayoritariamente mujeres las víctimas. Si bien la región Lima concentra el 60% de los casos registrados, la región Junín ocupa el segundo lugar con un 5,3 %, superando a otras regiones con centros urbanos importantes como Arequipa, Trujillo o Cusco.



Finalidad

El presente protocolo tiene como finalidad fortalecer la respuesta interinstitucional frente al ciberacoso contra adolescentes en el ámbito regional, estableciendo procedimientos comunes para su prevención, detección, atención, derivación, seguimiento y sanción. El protocolo busca garantizar la protección integral de las y los adolescentes, reducir la impunidad frente a estas violencias y promover entornos digitales seguros, inclusivos y libres de violencia.

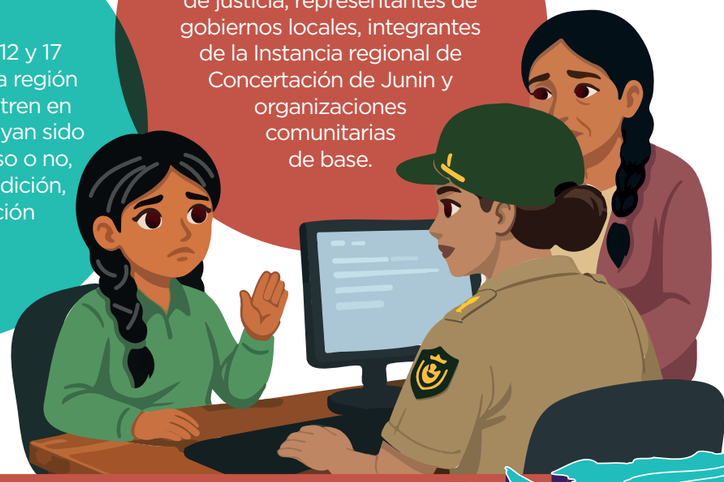
Objetivo

Establecer una ruta de actuación coordinada y articulada entre los sectores de educación, salud, justicia, protección social, gobiernos locales y comunidad, en el ámbito de la región Junin, para prevenir, atender y sancionar el ciberacoso ejercido contra adolescentes. Todo ello con un enfoque de derechos, género, interculturalidad y no revictimización, promoviendo respuestas rápidas, eficaces y sostenibles por parte de todas las instituciones competentes.

Población objetivo

Directa:
Adolescentes entre 12 y 17 años que residan en la región Junín, que se encuentren en situación de riesgo, hayan sido víctimas de ciberacoso o no, sin distinción de condición, identidad o situación educativa.

Indirecta:
Familias, docentes, personal de salud, fiscales, policías, operadores de justicia, representantes de gobiernos locales, integrantes de la Instancia regional de Concertación de Junin y organizaciones comunitarias de base.



Ámbito de intervención

Este protocolo se aplica en toda la región Junin, y comprende todos los casos de ciberacoso que afecten a adolescentes, sin importar si ocurren dentro o fuera del sistema educativo. Su aplicación compromete a instituciones públicas y privadas.



Base normativa

El presente protocolo se sustenta en el marco normativo nacional e internacional vigente en materia de derechos humanos, protección frente a la violencia, delitos informáticos y uso seguro de tecnologías de la información. Estas normas respaldan la actuación articulada de las instituciones en la región Junín frente al ciberacoso que afecta a adolescentes.

Internacional:

- Declaración Universal de los Derechos Humanos.
- Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).
- Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de las Naciones Unidas.
- Convención Interamericana sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).
- Observación General N.º 13 del Comité de los Derechos del Niño: “El derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia”.
- Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible – ODS 4 y ODS 16.

Nacional:

- Constitución Política del Perú.
- Ley Nº 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y su Reglamento.
- Ley Nº 27942, Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual.
- Decreto Legislativo Nº 1410, que incorpora el delito de acoso en el Código Penal.
- Ley Nº 30096, Ley de delitos informáticos.
- Ley Nº 30254, Ley de promoción para el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicaciones por niñas, niños y adolescentes.
- Código Penal Peruano
- Ley Nº 27337, Código de Niños y Adolescentes.
- Ley Nº 28044, Ley General de Educación.
- Ley Nº 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas.
- Decreto Supremo Nº 004-2018-MINEDU, que aprueba los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar.
- Decreto Supremo Nº 006-2021-MINEDU, que aprueba los lineamientos para la gestión escolar en instituciones públicas de Educación Básica.
- Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 26842, Ley General de Salud.
- Ley N° 30947, Ley de Salud Mental.
- Ley N° 26892, Ley para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas.

Regional:

- Ordenanza Regional Nº 425-2025-GRJ/CR aprueba el “Protocolo Regional de Actuación Frente al Ciberacoso contra Adolescentes en la Región Junín”
- Resolución directoral regional de Educación Junin ° 1729 - 2026- DREJ- 15 de julio 2026 disposiciones para implementar el “Protocolo Regional de Actuación Frente al Ciberacoso contra Adolescentes en la Región Junín”.

Definiciones

Las siguientes definiciones permiten una comprensión común entre todas las instituciones y operadores involucrados en la implementación del presente protocolo, y se sustentan en fuentes nacionales e internacionales especializadas en derechos de la niñez, violencia digital y delitos informáticos:



CIBERACOSO:
Comportamiento intencional y hostil ejercido a través de tecnologías digitales, como redes sociales, mensajería, correo electrónico o videojuegos en línea, entre otras emergentes, que tiene como finalidad intimidar, humillar, excluir, amenazar o perjudicar emocionalmente a una persona. Cuando la víctima es adolescente, este acto se considera una forma de violencia que afecta su desarrollo integral, y puede configurar un delito.





VÍCTIMA:
Adolescente que ha sido objeto de ciberacoso, ya sea de manera directa (por parte del agresor/a) o indirecta (a través de difusión, replicación o incitación de contenido violento o humillante). La víctima puede o no conocer a su agresor/a, y puede encontrarse en situación de riesgo psicoemocional, social y/o físico.



AGRESOR/A:
Persona (adolescente o adulta) que realiza actos de ciberacoso con intención de causar daño, humillar, controlar, amenazar o acosar. Puede actuar solo/a o en grupo, y puede recurrir a tecnologías digitales para ejercer poder sobre la víctima.



OBSERVADOR/A O TESTIGO:
Persona que presencia actos de ciberacoso en línea, sin intervenir activamente para detenerlos, es decir asume un rol pasivo (silencio, indiferencia).



CÓMPLICE DIGITAL:
Persona que, sin haber iniciado el acto de ciberacoso, contribuye a perpetuarlo mediante la réplica de contenidos, y ello puede configurar un delito. En muchos casos, el cómplice es parte del círculo social de la víctima o del agresor/a.



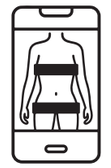
ENTORNO VIRTUAL:
Conjunto de plataformas, aplicaciones, redes sociales, sitios web, videojuegos, foros y otros espacios digitales donde las y los adolescentes interactúan, comparten información y se comunican con tecnologías digitales. Puede ser de uso educativo, recreativo o social, y no siempre es monitoreado por personas adultas responsables.



CIUDADANÍA DIGITAL:
Conjunto de habilidades, prácticas y valores que permiten a las personas interactuar de forma responsable, crítica y ética en los entornos digitales. Implica conocer derechos y deberes en línea, proteger la privacidad, ejercer la libertad de expresión con respeto, identificar riesgos digitales y actuar ante situaciones de violencia virtual.



GROOMING:
Acción deliberada de una persona adulta para ganarse la confianza de una niña, niño o adolescente a través de tecnologías digitales, con el objetivo de obtener beneficios sexuales (virtuales o presenciales), como el envío de imágenes íntimas, el contacto sexual o la producción de material de explotación sexual.



SEXTORSIÓN:
Forma de chantaje en la que un agresor amenaza con difundir imágenes, videos o mensajes de contenido íntimo o sexual si la víctima no accede a nuevas exigencias, como el envío de más contenido, actos sexuales o dinero. Puede comenzar con consentimiento, pero siempre se transforma en una dinámica de coacción y violencia, y configura un delito.



CIBERPERSECUCIÓN / STALKING DIGITAL:
Vigilancia o seguimiento obsesivo de una o más personas, mediante redes sociales, aplicaciones de geolocalización u otras tecnologías digitales. Puede implicar el envío constante de mensajes no deseados, amenazas, control de rutinas o recopilación no autorizada de información personal.



CIBERBULLYING:
Acoso entre pares, usualmente entre adolescentes, ejercido a través de tecnologías digitales. Incluye insultos, burlas, difamación, amenazas o exclusión en línea, con la intención de someter o dañar emocionalmente a la víctima. Su impacto se agrava por la posibilidad de viralización y anonimato, y puede configurar un delito.



DIFUSIÓN NO CONSENTIDA DE IMÁGENES ÍNTIMAS:
Publicación o reenvío de fotos, videos o audios de carácter íntimo o sexual, sin la autorización de la persona afectada. Constituye una grave vulneración del derecho a la intimidad y dignidad, y configura un delito.



BOFETADA FELIZ / HAPPY SLAPPING:
Agresión física cometida contra una persona (generalmente adolescente) con el propósito de grabar el acto violento en video y difundirlo por tecnologías digitales para burlarse, humillar o ganar popularidad entre pares.



VIOLENCIA DIGITAL:
Toda acción u omisión intencional que cause daño psicológico, emocional, simbólico o social a una persona a través de tecnologías digitales. Incluye las conductas arriba descritas y otras como la vigilancia invasiva, el hostigamiento en línea, el acoso en videojuegos y el uso malicioso de datos personales, y puede configurar un delito.



SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD:
Uso no autorizado del perfil o nombre de una persona por tecnologías digitales, con el fin de perjudicar su reputación, cometer delitos, acosar a terceros o extraer información. También puede implicar la creación de cuentas falsas o robos de contraseñas, y configura un delito.



PRUEBA DIGITAL O EVIDENCIA ELECTRÓNICA:
Cualquier archivo, mensaje, captura de pantalla, metadato, video, conversación o registro que pueda usarse para documentar hechos de ciberacoso. Puede provenir de la víctima, testigos, operadores del sistema o plataformas tecnológicas.

Principios rectores

Los principios que orientan este protocolo garantizan que la intervención ante situaciones de ciberacoso contra adolescentes en la región Junín se realice con criterios de legalidad, ética, eficiencia y respeto a los derechos humanos. Estos principios deben guiar la actuación de todas las instituciones y operadores intervinientes, en cada una de las fases: prevención, detección, atención, derivación, investigación y seguimiento.



Interés superior del/a adolescente

Toda medida adoptada debe priorizar la protección y bienestar del o la adolescente afectada. Las decisiones institucionales deben enfocarse en su desarrollo integral, seguridad emocional, acceso a justicia y recuperación oportuna.

No revictimización

El abordaje de los casos debe evitar cualquier acción que exponga nuevamente a la víctima a situaciones de sufrimiento, discriminación o exposición innecesaria. Las entrevistas, derivaciones y procesos deben ser breves, respetuosos y realizados con enfoque protector.





Dignidad humana

Toda/o adolescente, víctima, testigo o presunto agresor/a debe ser tratado con respeto a su condición de persona, evitando juicios morales, humillaciones o actos que lesionen su integridad.



Enfoque de derechos

El protocolo reconoce a las y los adolescentes como titulares de derechos, con capacidad progresiva de participar en las decisiones que les afectan. El protocolo garantiza su acceso a servicios, información, participación y protección sin discriminación.

Enfoque de género

Reconoce a todas las personas, independientemente de su identidad de género, tienen el mismo potencial para aprender, desarrollarse plenamente y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones y oportunidades.

Las acciones de prevención, atención y protección frente al ciberacoso deberán promover relación de respeto, igualdad y no discriminación, evitando toda forma de violencia o afectación basada en estereotipos de género.

Asimismo, las instituciones educativas deberán garantizar entornos seguros inclusivos y libres de discriminación, promoviendo el desarrollo integral de las y de los estudiantes conforme a los enfoques transversales establecidos en el Currículo Nacional de la Educación Básica aprobado mediante Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU.





Enfoque del ciclo de vida

Reconoce que las y los adolescentes requieren una comunicación adaptada a su etapa de desarrollo y capacidades evolutivas. Las intervenciones deben ser comprensibles, empáticas y pedagógicas.

Enfoque intercultural

Considera la diversidad étnica, cultural y lingüística de la región Junín, y promueve intervenciones que respeten los saberes, costumbres y lenguas originarias.
Se reconoce que las manifestaciones y formas de nombrar la violencia pueden variar según el contexto.



Enfoque participación corresponsable

La prevención y atención del ciberacoso requiere la acción conjunta de instituciones, familias, comunidad, sector justicia y sociedad civil. Ninguna entidad puede actuar de forma aislada.



Enfoque de Debida diligencia

Toda entidad pública tiene el deber legal y ético de actuar con prontitud, competencia y exhaustividad ante una situación de ciberacoso. Omitir, postergar o banalizar un caso constituye una infracción funcional y puede generar responsabilidad institucional.



Enfoque Protección de la prueba digital



Las y los operadores responsables de investigar o documentar el caso deben asegurar la integridad, confidencialidad y preservación de las evidencias digitales. Esto incluye mensajes, capturas, archivos y cualquier elemento que respalde la denuncia.

Enfoque presunción de inocencia y debido proceso

Toda persona señalada como presunto/a agresor/a tiene derecho a ser tratada sin prejuicios mientras se esclarecen los hechos. Las acciones deben respetar el equilibrio entre la protección a la víctima y las garantías del investigado/a.



Enfoque interseccional

Reconoce que las situaciones de ciberacoso no afectan a todas y todos los adolescentes de la misma manera, ya que múltiples factores como género, orientación sexual, identidad étnica, discapacidad, situación socioeconómica, territorio o lengua pueden superponerse y agravar la vulnerabilidad. Este enfoque obliga a las instituciones a identificar y considerar dichas intersecciones al momento de prevenir, atender o sancionar un caso, garantizando intervenciones más justas, culturalmente pertinentes y libres de discriminación.



Enfoque inclusivo

Las y los adolescentes con discapacidad tienen derecho a una atención sin barreras físicas, comunicacionales o actitudinales. Las instituciones deben adaptar sus mecanismos de comunicación, denuncia, atención y protección para asegurar el acceso en condiciones de igualdad, considerando apoyos personalizados, formatos accesibles y lenguaje claro.



Enfoque protector

Toda actuación frente al ciberacoso debe resguardar la integridad física, emocional y psicosocial del o la adolescente. La intervención debe evitar la exposición innecesaria al daño, garantizar entornos seguros, evitar prácticas revictimizantes y priorizar el interés superior del o la afectada durante todo el proceso.

Disposiciones y acciones para la prevención

La prevención del ciberacoso contra adolescentes requiere un enfoque articulado, sostenido y territorialmente adaptado. En la región Junín, las acciones preventivas deben estar lideradas por la DREJ y las 9 Instancias Provinciales de Concertación para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, e involucrar a todas las entidades responsables de garantizar entornos seguros para niñas, niños y adolescentes.

Las siguientes acciones deben incorporarse en los planes de acción y en las intervenciones regulares de cada institución, a fin de promover una cultura digital responsable, segura y solidaria. Estas son las principales acciones:

Entidad(es) responsable(s)	Acción preventiva	Sectores involucrados
9 municipalidades Provinciales/ Instancia de Concertación / Comité Municipal por los Derechos del Niño y del Adolescente	Incorporar el tema del ciberacoso y sus formas (grooming, sextorsión, suplantación, etc.) en las campañas y estrategias comunicacionales comunitarias.	MIMP, UGEL, Policía Nacional, organizaciones juveniles, CEMF, DEMUNA, COMUDENA, salud, Subprefecturas, organizaciones sociales.
DREJ y UGEL/ Dirección de IIEE	Desarrollar talleres, charlas y sesiones educativas dirigidas a adolescentes, familias, docentes y líderes comunitarios sobre riesgos digitales, ciudadanía digital y autocuidado.	CEMF, Centro de Salud Mental Comunitario, MIMP, ONG locales, Defensoría del Pueblo, Subprefecturas.
Oficina de Comunicaciones de las 9 Municipalidades / Instancia de Concertación en las 9 provincias	Implementar campañas en redes sociales, medios locales y espacios públicos sobre prevención del ciberacoso, con mensajes adaptados al contexto cultural y lingüístico.	PNP, MIMP, UGEL, Subprefecturas, organizaciones sociales, comunidades indígenas, adolescentes comunicadores.
CEMF y DREJ UGEL / Centro de Salud / Ministerio Público	Fortalecer las capacidades del personal educativo, de salud, justicia y operadores municipales sobre tipos de violencia digital, rutas de atención yprotección de evidencias.	DREJ, Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, DEMUNA, Subprefecturas, CEDIF.
DREJ UGEL / Municipalidades Provinciales / Juntas Vecinales	Promover brigadas escolares y comunitarias de prevención, conformadas por adolescentes capacitados en ciudadanía digital y liderazgo protector.	Dirección de la IE, CONEI, líderes juveniles, organizaciones de mujeres, CEMF, ONGs, Subprefecturas, Defensoría del Pueblo.
Subprefecturas distritales y provinciales	Realizar acciones de articulación y coordinación territorial para la vigilancia preventiva de casos de ciberacoso, reportes comunitarios y seguimiento de compromisos multisectoriales.	En las 9 provincias: Instancia de Concertación, PNP, CEMF, UGEL, DEMUNA, Defensoría del Pueblo, líderes comunales, autoridades comunales.
Municipalidades Provinciales / Instancia de Concertación	Asegurar la incorporación de las acciones de prevención en los instrumentos de gestión institucional y territorial: POI, PAT, PDLC, PEI y planes sectoriales.	Todas las entidades del Estado a nivel local que participen en la construcción de los planes.

Estas acciones deben ser monitoreadas semestralmente por la Instancia Regional de Concertación, con énfasis en los avances institucionales, barreras identificadas y participación adolescente. Toda acción de prevención debe contemplar un enfoque diferencial: de género, intercultural, territorial, generacional y de discapacidad, así como el uso de medios accesibles y tecnologías adecuadas al entorno rural y urbano de la región Junín.



Disposiciones y acciones para la detección

La detección del ciberacoso contra adolescentes implica la capacidad de identificar señales, testimonios, comportamientos, pruebas digitales o alertas que indiquen que un(a) adolescente está siendo víctima de violencia digital, incluso si no ha formalizado una denuncia. Esta etapa es clave para activar oportunamente los procedimientos establecidos en el presente protocolo, así como en los instrumentos normativos vigentes como la Ley Nº 30364 y su Reglamento, la Ley Nº 30254, el Código de Niñas, Niños y Adolescentes y los Protocolos para la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes del MINEDU.

A continuación, se detallan criterios fundamentales y acciones específicas, junto con su definición y entidades responsables:

Criterios clave para la detección:

CONDICIONES DE CONFIANZA:

Ambiente institucional o comunitario que brinda seguridad emocional y confidencialidad al/la adolescente para expresar lo que le ocurre. Se basa en relaciones de respeto, escucha sin juicio y acogida, construidas de forma sostenida por el CONEI, la comunidad educativa en su totalidad, personal de salud, policial, de justicia, líderesas y líderes comunales, DEMUNA, CEMF y demás actoras y actores cercanos.

ESCUCHA ACTIVA:

Actitud empática, sin interrupciones ni prejuicios, de quien recibe una posible alerta, testimonio o relato de un caso que vincula como posible víctima a la o el adolescente. Implica disponibilidad emocional y técnica para canalizar el caso, aun si la información es inicial o parcial. Implica validar su relato, usar lenguaje claro y asegurarle que su testimonio será tratado con seriedad y protección. Debe ser parte del accionar del personal educativo, policial, de salud, justicia y social.



CANALES ADECUADOS DE REPORTE

Son aquellos mecanismos que cumplen con ser accesibles, confidenciales, seguros y culturalmente pertinentes para adolescentes. Pueden ser presenciales o virtuales, y deben estar claramente definidos y visibles en cada institución, haciendo énfasis en que las y los adolescentes puedan reportar casos de ciberacoso sin necesidad de la compañía de una persona adulta. Estos incluyen:



Persona de confianza (docente, brigadista, líder comunitario).



Plataformas oficiales como la Línea 100, Chat 100, DEMUNA, Comisaría, DREJ-UGEL o CEMF.



Buzones físicos o virtuales de denuncia.



Formularios digitales con lenguaje inclusivo y seguro.

Situaciones o fuentes de detección principales:

- La o el propio adolescente informa del hecho a una persona adulta de confianza o lo comunica por un canal establecido.
- Una tercera persona (amigo/a, familiar, docente, madre/padre de familia, brigadista) da la alerta.
- Se detectan cambios significativos en el comportamiento de la o el adolescente, vinculados a angustia por interacciones digitales.
- Circulación de contenido íntimo, violento o difamatorio en grupos digitales locales.
- Derivación desde otra institución en el marco de sus propios protocolos (para la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes del MINEDU, hostigamiento sexual, atención de Línea 100, Chat 100, DEMUNA, delitos informáticos, entre otros).

Acciones específicas para la detección y entidades responsables en las 9 provincias de la región Junín:

ENTIDAD(ES) RESPONSABLE(S)	ACCIÓN DE DETECCIÓN	SECTORES INVOLUCRADOS
» IE » Centro de salud » CEMF	Observar y documentar signos emocionales o sociales que puedan estar vinculados a ciberacoso.	» DEMUNA, DREJ » UGEL » Lideresas y/o líderes comunales » Integrantes de la familia » Comunidad educativa
» DREJ: UGEL / IE » DEMUNA » Centro de Salud	Levantar acta, ficha o registro interno de alerta ante cualquier indicio.	» Policía » Fiscalía » CEMF » Salud
» Policía » CEMF » Fiscalía	Recolectar pruebas iniciales entregadas por la víctima (capturas, mensajes, videos, direcciones digitales, entre otros), garantizando la protección de datos.	» IE » Familia
» DREJ: UGEL / Dirección IE » Lideresas y/o líderes comunitarios » Lideresas y/o líderes escolares	Verificar de forma preliminar el entorno digital comunitario o escolar para identificar contenido sensible o replicado.	» PNP » Fiscalía
» Todas las entidades con competencias de primer contacto	Activar el presente protocolo ante la identificación de un caso, y vincularlo al protocolo sectorial específico si corresponde (p. ej., los Protocolos para la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes del MINEDU, Protocolos CEMF, protocolos policiales, entre otros.).	» 9 Instancias Provinciales de Concertación, Defensoría

Responsabilidad institucional ante omisiones:

Toda institución pública, servicio público o instancia comunitaria comprendida en el presente protocolo tiene la obligación legal de actuar frente a cualquier situación que pueda constituir un caso de ciberacoso contra una o un adolescente. Esta obligación incluye recibir, registrar, canalizar y derivar adecuadamente las denuncias, aun cuando estas sean presentadas directamente por la persona adolescente sin acompañamiento adulto.

La negativa injustificada a atender, remitir o tramitar una denuncia, así como la demora o el desinterés institucional en activar las rutas de atención, puede configurar una omisión funcional, y conllevar responsabilidad administrativa, funcional y penal. Estas situaciones deben ser reportadas inmediatamente a la DREJ, Instancia de Concertación de la provincia que corresponda, al Centro de Emergencia Mujer y Familia (CEMF), a la DEMUNA, y/o a la Defensoría del Pueblo, a fin de activar mecanismos de seguimiento y sanción.

En caso de que la omisión sea cometida por un funcionario público, el artículo 377 del Código Penal establece que será sancionado con pena privativa de libertad no mayor de dos años y multa de treinta a sesenta días. Cuando dicha omisión esté relacionada con una solicitud de protección por violencia familiar o vulneración de garantías personales —como ocurre en los casos de ciberacoso con connotación sexual, amenazas, hostigamiento o suplantación de identidad—, la pena puede aumentar de dos a cinco años de prisión.

Corresponde a cada institución garantizar que ningún adolescente sea ignorado, desestimado o revictimizado cuando solicita protección. Toda denuncia, señal de alerta o requerimiento de atención debe ser abordado con celeridad, empatía y en estricto cumplimiento de la ley.



Disposiciones y procedimiento para la atención y derivación

La atención de casos de ciberacoso contra adolescentes implica acciones articuladas y oportunas que garanticen protección, contención emocional, investigación, sanción y restitución de derechos. Las respuestas pueden tener carácter administrativo, psicosocial y/o penal, según la naturaleza del hecho y la normativa aplicable. Este protocolo debe ser activado de manera inmediata por cualquier entidad que tome conocimiento del caso, en coordinación con las rutas sectoriales específicas.



Principios de actuación en la atención

- Toda intervención debe considerar el nivel de riesgo, el impacto emocional, la situación familiar, la edad de la víctima y su nivel de exposición pública.
- Las entidades actuantes deben evitar duplicar entrevistas, traslados innecesarios o solicitudes excesivas de pruebas.
- La víctima no necesita demostrar su relato: basta con una alerta razonable para activar las medidas.

Canalización de las denuncias

- Si el hecho constituye un delito (como grooming, sextorsión, difusión de material íntimo sin consentimiento, acoso sexual o suplantación con fines ilícitos), la denuncia debe ser derivada al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú.
- Si se trata de una conducta de riesgo no tipificada como delito, pero que afecta el bienestar del/la adolescente (hostigamiento, burla viral, exclusión), la intervención puede ser asumida desde la vía psicosocial (CEMF, Centro de Salud Mental, UGEL, DEMUNA).
- En todos los casos, el presente protocolo y sus responsables deben garantizar la activación de la ruta correspondiente, sin perjuicio del derecho de la víctima o su familia a denunciar directamente.



Evidencia inicial y protección de la prueba

Las y los adolescentes que decidan reportar un hecho pueden aportar elementos como:

- Capturas de pantalla (pantallazos), mensajes, videos o audios que documentan la situación de violencia.
- Identificación del/a usuario/a, perfil o número desde el que se cometió la agresión.
- Enlaces, publicaciones o grupos donde se ha difundido el contenido.

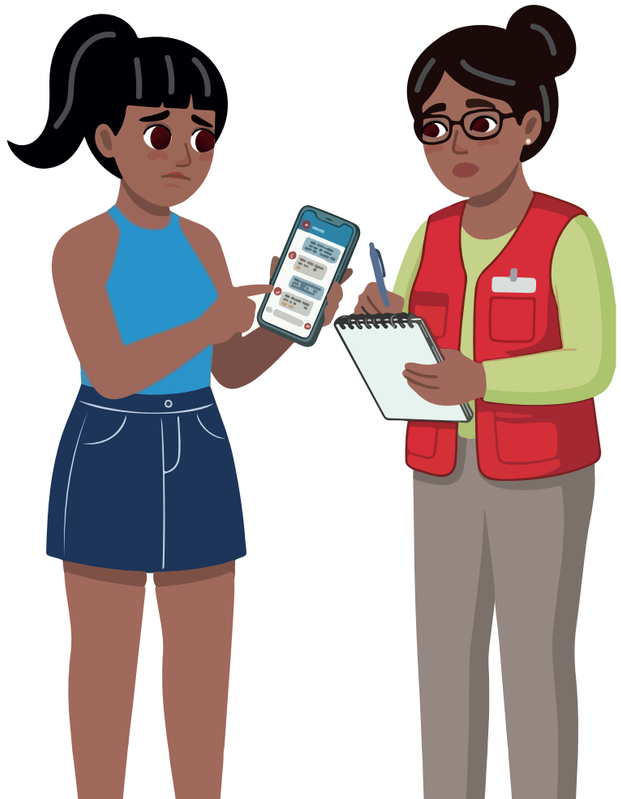
Estas pruebas no son obligatorias para la atención, pero pueden facilitar el proceso. Las instituciones que reciban esta evidencia están obligadas a:

- Registrar su recepción.
- Preservar su integridad (no borrarlas, alterarlas ni difundirlas).
- Derivarlas correctamente a la instancia competente.

Recomendaciones básicas para quien denuncia

Las instituciones deben orientar a quien realiza la denuncia (víctima o tercero) en lo siguiente:

- Guardar capturas o enlaces sin compartirlos.
- No responder ni confrontar al agresor/a.
- Evitar eliminar mensajes o conversaciones.
- Conservar los dispositivos utilizados (celular, tablet, etc.).
- Anotar nombres, fechas, horarios y lugares digitales, en la medida de lo posible.



Responsables por tipo de atención

ENTIDAD(ES) RESPONSABLE(S)	ACCIÓN PARA LA ATENCIÓN	ENTIDAD QUE COLABORA
Autoridades comunales (Jefes de comunidad, Tenientes gobernadores, Jueces de Paz), defensoras comunitarias, Estrategia Rural	Atención y contención inicial, para luego derivar el caso para la atención emocional, administrativa y legal.	CEMF, Salud, Policía, Juez de Paz, IE, UGEL, DEMUNA, Municipalidad, Fiscalía, Poder Judicial
CEMF / Centro de Salud Mental Comunitario	Atención emocional y contención inicial	IE, UGEL, DEMUNA, Municipalidad.
UGEL / IE en cada una de las 9 provincias	Atención administrativa activando el registro en el Libro de Incidencias y el Portal SISEVE (cuando se vulneran derechos).	CEMF, Salud, Policía.
Policía Nacional del Perú / Fiscalía / Poder Judicial	Atención legal y derivación penal (cuando se vulneran derechos, a fin de determinar si se trata de un delito)	CEMF, IE, DEMUNA
Entidad que activó el protocolo	Registro y seguimiento del caso	Todas las instancias convocadas.

Toda actuación debe quedar registrada en un expediente institucional, con copia o derivación formal según el caso. La atención no finaliza con el reporte inicial y/o la denuncia: debe haber seguimiento, derivación adecuada y cierre de caso con medidas de reparación, restitución o sanción efectiva según corresponda.



Disposiciones y procedimiento para la sanción y derivación

La sanción es un componente clave del abordaje integral del ciberacoso en contra adolescentes. Su aplicación efectiva no solo permite el acceso a la justicia para la víctima, sino que constituye un mensaje disuasivo frente a la impunidad de las violencias digitales. La sanción puede tener carácter penal, administrativo o disciplinario, según la gravedad de la conducta y el marco normativo vigente.

Ruta Penal

Cuando el ciberacoso adopta una forma tipificada como delito, por ejemplo:

- **Grooming** (art. 5 de la Ley N°30096)
- **Sextorsión** (Chantaje Sexual art. 176-C del Código Penal / Chantaje sexual con materiales elaborados o modificados por medios digitales o tecnológicos art. 5-A de la Ley N°30096)
- **Pornografía infantil o difusión de contenido sexual de adolescentes** (art. 183 del Código Penal)
- **Acoso sexual virtual** (arts. 176-B del Código Penal)
- **Suplantación de identidad y acceso ilícito** (art. 9 de la Ley N°30096)
- **Ciberpersecución / Stalking digital:** (Acoso 151-B del Código Penal / Acoso sexual 176-B del Código Penal)
- **Ciberbullying:** (Acoso 151-B del Código Penal / Acoso sexual 176-B del Código Penal / Difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual 154-B del Código Penal / Discriminación 323 del Código Penal)
- **Bofetada Feliz / Happy slapping:** (Lesiones 121 del Código Penal / Lesiones Leves 122 del Código Penal / Discriminación 323 del Código Penal)
- **Violencia digital** (Discriminación 323 del Código Penal)

El caso debe ser inmediatamente derivado al:

- **Policía Nacional del Perú:** Recoge pruebas digitales, testimonios y actúa conforme a sus competencias.
- **Ministerio Público (Fiscalía de Familia o Penal):** Recibe la denuncia y dirige la investigación penal.

La víctima y su familia tienen derecho a recibir orientación legal gratuita, medidas de protección y seguimiento del caso.

Las sanciones penales pueden incluir penas privativas de libertad o medidas socioeducativas (en caso de agresores adolescentes[1]).

1 Hasta la entrada en vigencia en la región Junín, el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1348.

Ruta administrativa

Cuando el hecho vulnera derechos pero no configura delito, o se produce y/o detecta en una institución pública (como una IE o un centro educativo), corresponde activar procedimientos administrativos:



DEMUNA:

Inicia procesos de protección frente a situaciones de riesgo o medidas administrativas de restitución.



DREJ-UGEL o Dirección IE:

Aplica los Protocolos para la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes y sanciona disciplinariamente a personal responsables, conforme al reglamento interno y el marco legal vigente.



MIMP / CEMF:

Puede solicitar medidas de protección o activar rutas especiales según el nivel de afectación.

Las sanciones administrativas contra la persona adulta que sea sindicada como agresora, pueden incluir:

- Amonestación escrita.
- Suspensión temporal.
- Destitución del cargo.

Acciones en los procedimientos administrativos cuando el agresor/a es adolescente

Se aplicará el principio de interés superior del adolescente, promoviendo medidas restaurativas. Estas pueden incluir orientación, medidas reguladoras, actas de compromiso, disculpas públicas, programas de reeducación o seguimiento terapéutico. La intervención debe estar guiada por equipos psicopedagógicos, DREJ-UGEL y/o servicios especializados del MIMP.

Roles y responsabilidades de los actores

A continuación, se describen las funciones clave que deben cumplir las instituciones públicas, operadoras y operadores sectoriales y actoras y actores comunitarios involucrados en la atención del ciberacoso contra adolescentes en la región Junín

Todas las personas antes mencionadas deben actuar bajo los principios de corresponsabilidad, enfoque protector, no revictimización y articulación interinstitucional:

ACTOR / INSTITUCIÓN	RESPONSABILIDADES
Instancia Regional de Concertación	Coordina y supervisa las acciones integradas de prevención, atención y sanción. Incorpora el ciberacoso en sus planes de acción y evalúa su implementación.
Gobiernos locales de las 9 provincias	Lidera las campañas preventivas, articula servicios locales, garantiza presupuesto para acciones de protección digital, refuerza el rol de las DEMUNAS.
DREJ y UGEL	Supervisa que las IE brinden atención a los casos de violencia digital de acuerdo con los Protocolos para la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes del MINEDU. Coordina con las autoridades del ámbito rural y de pueblos indígenas, principalmente las y los Jefes de las Comunidades, las acciones para la atención de la violencia digital contra adolescentes. Coordinar y promover el trabajo articulado con los servicios especializados para la prevención y atención de la violencia digital contra adolescentes.
Direcciones de Instituciones Educativas (IE)	Brindan primeros auxilios emocionales, recogen testimonios, canalizan los casos según el nivel de riesgo, activan los Protocolos para la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes del MINEDU si corresponde.
CEMF (Centro de Emergencia Mujer y Familia)	Atiende de manera integral a víctimas (orientación legal, atención psicológica y social). Deriva y hace seguimiento. Capacita a operadores locales.

ACTOR / INSTITUCIÓN	RESPONSABILIDADES
DEMUNA (Municipalidad)	Atiende casos en la vía administrativa, promueve conciliaciones y protege derechos vulnerados. Deriva a otras instancias si el caso excede su competencia.
Centro de Salud / Salud Mental Comunitario	Detecta signos clínicos de afectación emocional. Brinda contención y atención terapéutica. Participa en planes de recuperación y monitoreo post-caso.
Policía Nacional del Perú	Recibe denuncias formales, recopila pruebas digitales, deriva a fiscalía y ejecuta medidas de protección urgentes. Participa en campañas comunitarias.
Ministerio Público – Fiscalía de Familia	Investiga casos que constituyan delitos. Solicita medidas de protección judiciales. Coordina con policía, CEMF y UGEL. Presenta cargos cuando hay mérito.
Defensoría del Pueblo (Módulo Regional o Provincial que corresponda)	Supervisa el cumplimiento de los protocolos y obligaciones legales. Recibe quejas por omisión o maltrato institucional. Acompaña a víctimas cuando lo requiere.
Organizaciones comunitarias (líderes comunales, Juntas Vecinales, organizaciones juveniles, asociaciones indígenas)	Difunden mensajes de prevención. Detectan y alertan casos en el territorio. Pueden actuar como enlaces entre las víctimas y los servicios.



Todas estas instituciones deben garantizar la preservación de la evidencia digital, mantener el principio de confidencialidad y responder sin discriminación ante cualquier caso reportado. La ausencia de alguno de estos actores no exime al resto de su obligación de activar el protocolo y proteger a la víctima.

Cuando una entidad pública o servidor se niega a recibir una denuncia, no registra ni deriva un caso, minimiza la situación o vulnera el deber de confidencialidad, incurre en una falta funcional grave. Esto puede ser denunciado ante:

- Órganos de Control Interno
- Defensoría del Pueblo
- Ministerio Público

Articulación intersectorial para la gestión de los casos de ciberacoso contra adolescentes

La atención integral del ciberacoso contra adolescentes requiere un funcionamiento coordinado de todas las instituciones competentes, bajo una lógica de red de protección. Esta articulación debe tener como eje a la Instancia Regional de Concertación de Junín e Instancias provinciales de concertación conforme al mandato de la Ley Nº 30364.

Mecanismos de coordinación

- Las acciones de prevención, atención, derivación, seguimiento y cierre de caso deben estar contempladas en los planes de acción de las 9 Instancias Provinciales de Concertación.
- Cada institución debe designar una persona enlace para facilitar la articulación ante casos de ciberacoso.
- Se deben desarrollar reuniones periódicas de coordinación técnica entre CEMF, UGEL, DEMUNA, Fiscalía, PNP, Salud y Defensoría del Pueblo en cada una de las 9 provincias
- La Instancia debe llevar un registro de alertas, respuestas y derivaciones, sin vulnerar la confidencialidad.



Detección o reporte del caso (víctima, familiar, testigo, institución)

1. Detección o reporte del caso (víctima, familiar, testigo, institución).
2. Recepción y registro institucional (IE, CEMF, DEMUNA, Salud, PNP, según corresponda).
3. Evaluación del riesgo y activación del protocolo.
4. Derivación inmediata:
   - Si hay delito a Policía Nacional / Fiscalía.
   - Atención psicosocial à CEMF/ Salud Mental / DEMUNA.
   - Si ocurre en IE à Director/a y/o UGEL activa los protocolos para la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes
5. Atención integral:
   - Contención emocional.
   - Asesoría legal.
   - Medidas de protección.
6. Seguimiento interinstitucional:
   - Reuniones de caso.
   - Acompañamiento a la víctima.
   - Coordinación con la familia.
7. Cierre del caso:
   - Una vez garantizada la seguridad, bienestar y reparación mínima.
   - Informe final remitido a la Instancia de Concertación.



Coordinación para asegurar la sanción

La DREJ en alianza con Instancia Regional de Concertación debe garantizar el seguimiento de casos emblemáticos, exigir informes periódicos, revisar la aplicación efectiva de sanciones y emitir recomendaciones para fortalecer las respuestas. Asimismo, las entidades intervinientes deben registrar todas las medidas tomadas en los expedientes institucionales y asegurar la trazabilidad del caso.



Flujograma de atención interinstitucional

Este flujo es vinculante para todas las entidades que operan en la región Junín y debe ser revisado anualmente por la DREJ en articulación con la Instancia de Concertación, junto con los ajustes a los planes operativos de cada institución.

1

Detección del caso

IE, Salud, CEMF, PNP, DEMUNA, Comunidad



Reporte verbal o escrito (víctima o testigo)

2

Registro inmediato

IE, Libro incidencias, UGEL, SISEVE, CEMF, PNP)
Plazo: mismo día

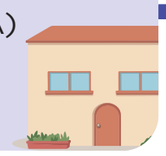


Evaluación de riesgo

3

Evaluación preliminar

(CEMF, UGEL, DEMUNA)
Plazo: dentro de 24 horas



4

Derivación según análisis

CEMF: contención, **Salud mental** (evaluación psicológica),
DEMUNA (protección administrativa)
Plazo: dentro de 24 horas



Coordinación interinstitucional

5

Coordinación interinstitucional

(Reunión de caso convocada por instancia o CEMF)
Plazo: dentro de 3 días



Aplicacion de medidas preventivas

6

Medidas administrativas UGEL/IE

(Separación preventiva, medidas de protección)



7

Seguimiento intersectorial

(Informe mensual a instancia provincial de concertación)



Validación y cierre por instancia

8

Cierre del caso

(Cuando se acredita la atención integral y garantía de no repetición)





PROTOCOLO REGIONAL DE ACTUACIÓN FRENTE AL CIBERACOSO CONTRA ADOLESCENTES EN LA REGION JUNÍN
(Ordenanza regional: 425-2025)
se terminó de imprimir en los
talleres gráficos de
Ymagino Publicidad S.A.C.
Lima, 2026

Protocolo Regional de actuación frente al Ciberacoso contra adolescentes en Junín

